

EL VALOR DE LA DEMOCRACIA NO COTIZA EN LA BOLSA DE VALORES

▪ Luis Ignacio Román Morales* ▪

El pasado 31 de octubre del 2011, el entonces primer ministro de Grecia, Georgios Papandreou, convocó a la realización de un referéndum nacional para avalar o rechazar la propuesta de la Unión Europea de rescate financiero y ajuste económico, que debería seguir el país durante un periodo que podría extenderse por dos décadas. El acuerdo financiero y la propuesta de referéndum se presentaban en el entorno de una situación financiera crítica para Grecia, de dos años de intensas políticas de reducciones a los gastos económicos y sociales, así como de violentas manifestaciones sociales en contra de los ajustes ya realizados. Aceptar la iniciativa europea implicaba un largo periodo de sacrificios sociales aún

* Es economista por la UNAM, maestro y doctor en Economía por la Universidad de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel II, y profesor titular en el ITESO.

mayores, y el no aceptarla significaba la amenaza de que Grecia agotara su disponibilidad de euros y, por consiguiente, que saliese de la Zona Euro, provocando un derrumbe monetario interno.

Más allá del contenido específico de la propuesta de ajuste, la cuestión fundamental era la de definir si Grecia, democráticamente, podía decidir en torno a las políticas económicas y sociales de su gobierno. La respuesta de la Unión Europea fue contundente: ¡No, no puede! En términos del presidente francés Nicolás Sarkozy: “*Las reglas se siguen*”. La iniciativa de referéndum de Papandreou precipitó la caída de su gobierno y unos días después le seguirían Italia y España. Las calificadoras financieras internacionales también bajaron la calificación de la deuda soberana de Bélgica, Portugal y Hungría, lo que alimentó los recortes sociales y la inestabilidad política en esos países. En enero de 2012, la calificadora Estándar & Poors redujo la calificación de deuda de nueve de los 15 países de la Zona Euro que dictaminó en ese momento, incluyendo la de Francia. Ello repercutirá en una elevación en las tasas de interés que tengan que pagar los gobiernos para agenciarse de divisas (a menor estabilidad mayor riesgo y, por ende, mayor tasa de interés), y en consecuencia necesitarán hacer recortes de gasto aún mayores.

En Estados Unidos, el “*Yes, we can*” del presidente Obama se ha convertido en un programa masivo de reducción de gastos y de aumento de deuda, afectando especialmente al sistema de salud y al empleo. No hay un acuerdo claro sobre la forma de reducción de gastos. El techo de endeudamiento del gobierno estadounidense ya es equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) anual total del mundo no altamente industrializado. Su aceptación y legitimidad política están en declive, mientras que se sostiene la prioridad fundamental: salvar al sistema financiero.

En Estados Unidos, la preocupación clave vuelve hacia la estabilidad financiera de las grandes corporaciones, como lo atestigua la quiebra de

MF Global. En Europa, los nuevos primeros ministros de Grecia e Italia son exfuncionarios de Goldman Sachs, al igual que el presidente del Banco Central Europeo, lo que en conjunto confirma un hecho clave: el poder del mundo financiero tiende a imponerse sobre los derechos sociales y el debate político.

Lo anterior muestra una profunda imbricación entre el poder económico, el político y el conflicto social. Los movimientos de los indignados, del M 15 del 99%, y de los estudiantes chilenos, entre otros, dan cuenta de un cuestionamiento ciudadano creciente frente al poder financiero y a la concentración extrema de la riqueza entre los altos accionistas y dirigentes de los mayores corporativos del mundo. La internacionalización y la globalización económicas han dado paso a una inestabilidad global y a movilizaciones también internacionalizadas. El poder político se dirige, crecientemente, hacia entes internacionalizados, institucionalizados o no (como el FMI o el Banco Central Europeo en el primer caso, o el G-20 y el G-8 en el segundo).

Formalmente, no hay una negación a la democracia en el discurso político, pero cabe preguntarse qué papel puede jugar una democracia subordinada a la plutocracia; qué alternativas pueden plantearse para que el “mundo financiero” contribuya, en vez de imponerse al desarrollo económico, a la sustentabilidad y a los derechos sociales; qué papel puede jugar la política para revertir el actual balance de poder.

Las implicaciones político-sociales de 2011 en Europa tienden a expandirse también en Estados Unidos, lo que resulta crítico en un año electoral: mantener la política de complacencia ante los principales entes financieros implica un riesgo electoral ante el descontento social creciente. Simultáneamente, generar un viraje significativo implicaría un impacto financiero de enormes dimensiones que no parece que los poderes políticos y económicos estén dispuestos a asumir.

En México, a pesar de encontrarnos también en una coyuntura electoral trascendente, el dilema entre poder financiero e intereses sociales no parece abordarse de manera significativa en la palestra pública, al menos hasta inicios de 2012. Sin embargo, la coyuntura recesiva internacional constituye un entorno particularmente complejo: la economía mexicana se ha volcado desde hace tres décadas hacia el mercado externo en detrimento del interno. Se han castigado los salarios reales, las prestaciones, la estabilidad laboral y el cumplimiento de derechos sociales, procurando reducir costos laborales, el tamaño económico del Estado y la supuesta ineficiencia gubernamental, con el fin de favorecer las ventajas competitivas ante el sector externo. Más allá de que la evolución de la competitividad ha sido igualmente regresiva (expresando el fracaso de la estrategia seguida), la cuestión es qué hacer cuando el mercado externo de México corre el riesgo de colapsarse y el mercado interno ha sido históricamente debilitado. El mercado que no es externo es interno y viceversa. El deterioro de ambos entorpece el conjunto de la economía orientada al mercado y, por ende, la producción, el empleo, el comercio y el funcionamiento económico en su conjunto.

¿Cómo puede el contexto adverso incidir sobre la economía mexicana en medio de un proceso electoral presidencial?, ¿qué papel puede jugar el poder financiero en el entorno electoral?, ¿qué implicaciones pueden tener los resultados electorales en la forma en la que se enfrente tal contexto económico? El presente artículo pretende reflexionar sobre estas cuestiones. En la primera parte presentaremos el contexto económico previsible para México en el actual 2012. En la segunda abordaremos las líneas políticas que comienzan a delinearse por parte de las fuerzas electorales contendientes y la posible incidencia de los poderes económicos en las campañas. Por último, trataremos los posibles escenarios económicos poselectorales en función de los resultados electorales.

1. La economía mexicana en 2012: el debilitamiento en un contexto electoral

Durante el año 2011 el PIB de la economía mexicana creció 4% y para 2012 las expectativas oficiales indican que se reducirá tal porcentaje a 3.5% (y las Instituciones Financieras Internacionales lo están reduciendo a 3.2%). Suponiendo que se logre el 3.5%, el gobierno de Felipe Calderón terminará con una tasa promedio anual de crecimiento para el conjunto de su mandato de tan sólo 1.8%, es decir, la menor desde el sexenio de crecimiento cero durante la gestión de Miguel de la Madrid, en la denominada década perdida. Con esto se cumplirán tres sexenios de crecimientos cada vez menores (Zedillo, Fox y Calderón) y cinco (incluyendo a los de Salinas y De la Madrid) en los que no se alcanza el promedio de tasa de crecimiento económico que se había tenido durante los 46 años previos, de 1935 a 1981.

El crecimiento económico no garantiza la mejora en la calidad de vida de una sociedad, puesto que la mala distribución del ingreso y de la riqueza, el deterioro ecológico y diversos aspectos cualitativos pueden minar las condiciones de vida de la población, aunque aumente la producción de bienes y servicios. Sin embargo, la producción es una condición necesaria (aunque no suficiente) para la generación de empleo, la disponibilidad de satisfactores, el desarrollo de las empresas y el financiamiento del sector público. El crecimiento desigual y ecocida implica consecuencias catastróficas, pero el no crecimiento en un contexto como el mexicano es igualmente dañino.

México parece combinar lo peor de ambos escenarios: un crecimiento raquítico, polarizador de la riqueza y ambientalmente perverso. Sin embargo, desde los discursos gubernamentales, de las principales cúpulas empresariales y de los medios masivos de comunicación, se insiste de manera recurrente en que “vamos por el camino correcto” y que, en todo

caso, nuestras limitaciones no se derivan del rumbo que tenemos sino de la velocidad a la que circulamos. En este discurso, lo que se necesitaría es meter más el acelerador en los cambios estructurales que el país requiere (reformas energética, laboral, de comunicaciones, etc.), siempre en la misma dirección de liberalización económica que se ha seguido durante 30 años.

Resulta paradójico que en la década pasada (2000 a 2009), México fuese, después de Haití, el país con peor tasa de crecimiento en todo el continente americano, y que tanto en 2010 como en 2011 y en las expectativas de 2012, se siga creciendo por debajo del promedio latinoamericano. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) registra un promedio regional de 5.9%, 4.3% y 3.7% para esos años, mientras que en México las cifras respectivas son de 5.6%, 4.0% y 3.5%. Los países que habrían tomado “el camino equivocado” son los que crecen, generan empleo, progresan tecnológicamente, se integran entre ellos y están corrigiendo problemas de inequidad, pero nosotros somos los que, sin lograrlo, “actuamos responsablemente”... aunque no queda claro ante quién somos responsables.

Desde que comenzó el proceso de liberalización económica de México, a inicios de la década de los ochenta, la responsabilidad del Estado se ha centrado en atender las “necesidades del mercado”, expresado en el denominado *realismo económico* de los años ochenta y las reformas estructurales tendientes a favorecer el juego económico entre agentes privados. Entre estas reformas ha destacado la apertura de la economía mexicana, mediante la cual se ha priorizado la extraversion del aparato productivo. En esta lógica, lo central no es producir para satisfacer nuestras necesidades de generar nuevas capacidades, sino para colocar nuestros productos en el exterior y atraer inversión para competir en el plano internacional. En otros términos, ubicar crecientemente nuestro mercado en el exterior,

con ello obtener divisas, y con éstas comprar lo que requerimos del resto del mundo; es decir, centrarlos en el mercado externo.

México cuenta con una base tecnológica atrasada, una enorme heterogeneidad productiva (combinación de tecnologías modernas y rezagadas), serios problemas de organización de la producción, una infraestructura deficiente, un alto costo del crédito, baja calidad educativa y de servicios de salud y sin inversión en investigación y desarrollo. En tal situación, las capacidades de ser competitivos se centran en la reducción de costos de producción, principalmente salariales (sea mediante el salario directamente o a través de las prestaciones y la estabilidad en el empleo), en los subsidios públicos y en la permisibilidad del deterioro ecológico. Pero estos mecanismos de competencia de corto plazo deterioran la sustentabilidad y el mercado interno, así como la cohesión social necesaria para impulsar un proceso de desarrollo. En otros términos, el mercado externo y un escaso mercado interno de altos ingresos constituyen el centro del mercado para la producción nacional.

Sin embargo, la circunstancia actual presenta una severa complicación... ¿hacia dónde dirigir la producción cuando el mercado externo es incierto y el interno se encuentra ya históricamente debilitado? Como ya se comentó, el mercado que no es externo es interno y viceversa, y si ninguno de los dos se desarrolla, el crecimiento de la producción no puede tener salida. Si la producción no aumenta, tampoco lo hace el empleo y, por ende, tampoco el consumo, las ganancias y la inversión. Todo el sistema económico se obstaculiza.

Como hemos señalado en la introducción, la expectativa internacional es la de severos ajustes en el gasto tanto público como de los hogares, al menos para los próximos diez años. En ese sentido, es cada vez más frecuente que gobernantes y empresarios refieran la necesidad de fortalecer el mercado interno... ¿pero cómo hacerlo sin cambiar el rumbo?

Las prácticas implantadas al final de 2011 no parecen financieramente sostenibles para aumentar el mercado interno. Las iniciativas de impulso a las compras sin un correspondiente aumento real en los ingresos conllevan un proceso de endeudamiento que tendrá que saldarse con una reducción del consumo futuro. Iniciativas como “el buen fin”, para alentar las compras a crédito, pueden convertirse en un auge fugaz de adquisición de productos importados o fabricados y vendidos por unas cuantas empresas oligopólicas, en detrimento del consumo corriente durante amplios plazos posteriores. En este caso, los grandes ganadores son los bancos, las empresas de bienes de alta tecnología y los comercios que cooptan el consumo de los estratos de ingresos medios y altos. El endeudamiento de los hogares sin contraparte en un aumento real de sus ingresos es saldado por una reducción del mercado interno.

Un segundo elemento que puede generar un mayor deterioro en el mercado interno es el repunte inflacionario. Todavía en septiembre de 2011, en los Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda, se esperaba para ese año una inflación de 3%. En la encuesta de expectativas de los especialistas consultados del Banco de México de diciembre de ese año, se esperó que la inflación fuese del 3.7%. La realidad superó ambos datos, pues alcanzó 3.82%. Por consiguiente, el incremento de 4.2% a los salarios mínimos (y una expectativa similar para los contractuales) implica, en realidad, un incremento de poder de compra de 0.36%, mismo que probablemente haya sido absorbido con la inflación de tan sólo enero de 2012. De hecho, conforme a las declaraciones del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en enero de 2012, la tasa de inflación podría superar el 4% en todo el año. Más delicado aún es el hecho de que ante el deterioro ambiental, la severa sequía que ha sufrido el país en el ciclo de invierno 2011-2012 y el incremento en los precios internacionales de las materias primas, se genere un aumento de precios significativamente mayor en los pro-

ductos de primera necesidad y en particular en los alimenticios. Como en México más de la mitad de la población se encuentra, según el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas para el Desarrollo (Coneval), en situación de pobreza, el incremento en los precios de los alimentos reducirá aún más la posibilidad de fortalecer el mercado interno de los productos no alimenticios.

Asociado a lo anterior, la inflación puede atizarse por la inestabilidad en los mercados financieros, particularmente por la especulación de divisas. El debilitamiento del euro junto con el endeudamiento público en Estados Unidos, favorecen la búsqueda de ganancias comprando y vendiendo oro y divisas, lo que afecta más a las monedas de los países débiles y altamente abiertos, como México. Así, lejos de la expectativa que tenía la Secretaría de Hacienda, en septiembre pasado, de que la paridad del peso cerrara el año 2011 en 11.9 pesos por dólar, ésta se situó en niveles que rebasaron los 14 pesos. La diferencia, que representa una devaluación de 17.6%, se transmite al conjunto de los precios de los bienes importados, desde el maíz hasta la gasolina, desde la ropa hasta los bienes de capital. La inestabilidad financiera se convierte, entonces, en un tercer factor de deterioro del mercado interno.

Por último, los ajustes en el gasto y las importaciones de los países ricos, especialmente de Estados Unidos, dada la gran dependencia de México hacia ese mercado, puede implicar un incremento en las importaciones superior al de las exportaciones, una reducción en las remesas de los migrantes y un mayor costo por intereses del pago de la deuda externa (pública y privada) de México; en otros términos, un deterioro en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Como el mercado interno adquiere, de manera creciente, productos importados, un fortalecimiento de éste también podría implicar un mayor deterioro de las cuentas externas del país, por lo que difícilmente podrá impulsársele de forma amplia. Dada la

estructura arancelaria de México, un incremento en el poder de compra podría incentivar la adquisición de productos nacionales, pero también atizar las importaciones y el déficit.

Los factores anteriores hacen difícil que pueda sustituirse el mercado externo por el interno como factor central del crecimiento, a menos que se planteara una estrategia pública significativamente distinta a la actual. Sin embargo, las opiniones predominantes en las instituciones públicas y las de sus interlocutores privilegiados parecen retroalimentarse en un círculo cerrado. En las encuestas de expectativas de los especialistas, de diciembre de 2011, los consultados reafirmaron que los riesgos se encuentran en la debilidad de los mercados externos, en la inseguridad pública y en la incertidumbre cambiaria, pero agregan que uno de los principales riesgos es la ausencia de las reformas estructurales, referidas a una mayor liberalización, en los sectores energético, laboral, fiscal, de marco regulatorio, de desregulación, de seguridad pública y de Estado de derecho. De hecho, ninguno de los especialistas consultados considera un riesgo los siguientes ítems:

- Incertidumbre sobre la situación económica interna.
- Debilidad del mercado interno.
- Presiones inflacionarias en nuestro país.
- El precio de la exportación de petróleo.
- El elevado costo del financiamiento interno.
- Los niveles de tasas de interés externas.
- El aumento en los costos salariales (pues no lo hay).
- La escasez de mano de obra calificada.
- La lenta recuperación de los salarios reales.

Si a los especialistas no les inquietan los bajos salarios reales, las tasas de interés que cobran los bancos al pequeño emprendedor, la debilidad del mercado interno, o la incertidumbre interna (en especial de la esfera

real), es natural que lo único que importe sea profundizar en lo mismo que se está haciendo. Esto resulta de la conferencia presentada por el gobernador del Banco de México en la Secretaría de Relaciones Exteriores el 5 de enero pasado, en la que concluyó:

México se destaca por haber mejorado sus fundamentos económicos y fortalecido el marco para la conducción de la política macroeconómica. *Política monetaria enfocada en procurar la estabilidad de precios como ancla nominal*, mediante una política fiscal prudente, un régimen de tipo de cambio flexible y una regulación y supervisión adecuadas del sistema financiero. Estos elementos han contribuido a mejorar la confianza en la economía nacional y han permitido atenuar el impacto negativo de choques externos.

El mantenimiento de este discurso se enfrenta, sin embargo, a un escenario electoral que parece ser complejo. El discurso técnico-económico de la estabilidad generó un fuerte impacto en 2006 para que se mantuviera la estrategia económica. Sin embargo, la creciente violencia social y la inestabilidad financiera vuelven difícil una reproducción de la misma estrategia. En el plano mercadológico, lo más probable es que las campañas compitan en términos de fotos, eslogan y saturación de tiempos en los medios masivos. No obstante, la presencia creciente de las redes sociales como mecanismos de penetración políticas pueden generar cuestionamientos y debates que vayan más allá de lo advertido hasta la pasada campaña presidencial de 2006.

2. Poder económico y campañas electorales

La infiltración de “dinero sucio” en las campañas electorales ha sido advertido como un fuerte riesgo. Especialmente, Felipe Calderón ha

referido la posibilidad de que el dinero del narcotráfico juegue un poder real en las elecciones. Ya el Partido Acción Nacional (PAN) ha efectuado denuncias al respecto contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha visto afectado, especialmente en denuncias referidas a un hermano del exgobernador Godoy, en esa misma entidad. Un excandidato a diputado del Partido Verde también ha sido acusado y el expresidente Fox ha defendido, recurrentemente, la necesidad de negociar con los narcotraficantes. Todo lo anterior puede prestarse a múltiples interpretaciones, pero en todo caso refieren una presión significativa de las actividades ilícitas sobre la vida política. El denominado “narco” se convierte en un actor político inconfesable, pero que puede ser un factor real de poder mayor ante unas elecciones muy divididas.

El poder económico de una fuerza ilegal puede igualmente acompañarse del uso ilegal del dinero por parte de fuerzas legales. En otros términos, las “campanas sucias” podrán incentivarse en contra de alguno o algunos de los contendientes políticos, en especial si llegasen a cobrar fuerza iniciativas tendientes a establecer un giro significativo en la estrategia económica.

En tales circunstancias, es probable que en las campañas no se expresen de forma abierta las estrategias que plantee cada fuerza, sino sólo elementos tan generales y ambiguos que sean lo menos cuestionable posible por cualquier adversario.

Sin embargo, la lógica discursiva de los candidatos puede, al menos, ubicar un cierto orden de prioridades y los juegos de poder en los que se inserten.

2.1 La gran esperanza, Enrique Peña Nieto

En el libro *La gran esperanza*, en el que Enrique Peña Nieto figura como autor, se plantea un decálogo de propuestas para reactivar el crecimiento económico:

“*Manteniendo la estabilidad macroeconómica*, lo cual es condición indispensable mas no suficiente para el crecimiento acelerado. Requerimos finanzas públicas sanas y la garantía de autonomía del Banco de México para una política monetaria responsable”. En otros términos, se plantea la preservación de la lógica actual en la que la estabilidad financiera aparece como premisa de la esfera real.

“*Fomentando la competencia económica* en todos los ámbitos, aumentando la oferta de productos y servicios de mejor calidad a menor costo”. Del mismo modo, el eje es el de la competitividad por el mercado, al igual que en los últimos cinco sexenios.

“*Impulsando a México como potencia energética*. Evitemos aferrarnos a posiciones ideológicas que nos impiden hacer de Pemex la gran palanca de desarrollo del país. Necesitamos una reforma que sin perder la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos, triplique la inversión en este sector”. La búsqueda de liberalización en el sector energético es, al igual que en el planteamiento del Banco de México, un aspecto fundamental en la progresión de la liberalización económica.

“*Invirtiendo más en Capital Humano* para aumentar la productividad y la innovación. Desarrollemos productos con alto valor agregado y no seamos sólo una economía maquiladora o manufacturera, sino cada vez más una economía basada en la información y el conocimiento”. Resulta interesante que el planteamiento sea el de invertir en capital humano (una de las propuestas fundamentales de Ernesto Zedillo en 1994), y no el esta-

blecimiento de una política integrada de investigación y desarrollo, que si bien incluye la inversión en aspectos educativos implica, más allá de ello, toda una estrategia de política industrial que en este punto del decálogo no aparece considerada.

“Aumentando el nivel de crédito para financiar áreas estratégicas del desarrollo”. Este planteamiento, sumamente escueto, puede referir sólo oferta de crédito público, lo cual implica evaluar la estrategia crediticia que puede seguirse, pero no aborda la pertinencia o no de un mayor control y regulación de los recursos del sistema financiero, lo que implicaría una actitud más decidida frente al lavado de dinero y que promueva las actividades productivas a partir del ahorro privado sobre la promoción del crédito al consumo.

“Duplicando la inversión en infraestructura para ampliarla y mantener la existente”. La economía refiere, entre otros elementos y perspectivas, el estudio de la administración de recursos escasos. Difícilmente podría ser cuestionable la mejora y la ampliación sustentable y eficientemente construida de infraestructura, pero se requeriría ubicar las fuentes de financiamiento y las actividades que reducirían su importancia para transferir recursos a ésta. Si se efectuara mediante créditos, sería esencial detectar la estrategia de endeudamiento del probable próximo gobierno.

“Reduciendo la economía informal. Para aumentar la calidad de los empleos requerimos hacer más atractivo el sector formal”. El crecimiento del empleo en las actividades formales, es decir, en las que se encuentran claramente diferenciadas las contabilidades de la empresa y del hogar, implica la expansión de un mercado interno no oligopolizado y con un creciente nivel de ingreso de los hogares. No parece que este punto del decálogo pueda explicar algo al respecto.

“*Diseñando una nueva estrategia de comercio exterior* que supere el reto de competir con China e India en los mercados internacionales”. De nuevo parece desdeñarse el mercado interno, frente a la competencia internacional.

“*Impulsando una política moderna* de fomento sectorial. Reactivar el campo, impulsar nuestra vocación turística y una nueva política industrial”. ¿A qué se refiere la modernidad referida?, ¿cómo reactivar tales sectores en las condiciones actuales de debilitamiento de los mercados externo e interno?

“Para impulsar el crecimiento económico es necesaria una *Reforma Fiscal Integral*. Los ingresos totales del sector público equivalen al 23% del PIB, de impuestos sólo es el 10%; somos de los países con los menores niveles de recaudación. Si México no logra financiar su desarrollo a través de una reforma hacendaria integral, cualquier proyecto de transformación se quedará en el papel y nunca pasará a la práctica”. Quedará por definir cuál es la base sobre la que se lograría más que duplicar la captación tributaria. La ampliación de la base gravable ha sido propuesta por múltiples candidatos en el pasado, destacando Vicente Fox en 2000. Sin embargo, ésta no ha tenido éxito. ¿A quién y cómo se pretende cobrarle muchos más impuestos?, ¿cómo enfrentar la evasión y sobre todo la elusión por parte de los contribuyentes más acaudalados?, ¿qué experiencia de autoridad del candidato o del partido hacen pensar que, efectivamente, se tomará alguna decisión al respecto?

En suma, la propuesta de Enrique Peña Nieto es ambigua y poco novedosa; en todo caso parece reproducir el esquema de poder metapartidista que ha definido la estrategia económica en las últimas tres décadas.

2.2 La continuidad del PAN

Al cierre de la edición de este documento todavía no se encontraba definido el candidato presidencial del PAN. Sin embargo, toda la expectativa estaba centrada en Josefina Vázquez Mota, sobre Santiago Creel y Ernesto Cordero. Se han efectuado diversos debates entre los precandidatos, aunque no existe (hasta mediados de enero de 2012) una propuesta concreta de acciones en materia económica. La mayor cercanía con la problemática es la que aborda Ernesto Cordero, quien *grosso modo* representa la continuidad plena en la visión que ha llevado Felipe Calderón.

2.3 De primero los pobres a la República amorosa

En marzo de 2011, Andrés Manuel López Obrador presentó lo que él denominó el Nuevo Proyecto de Nación para el Renacimiento de México. En materia económica, propone la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; una intensa política antimonopólica; libertad sindical no corporativa; incrementos salariales superiores a la inflación; simplificación fiscal; priorización de la política industrial sobre la de estímulos al sector financiero; integración de una política de *cluster* en el sector energético; promoción a la inversión en investigación y desarrollo; priorización energética y financiera a favor de las empresas micro, pequeñas y medianas; creación de bancos sectoriales y regionales; impulso especial para la industria de la construcción para mejorar, ampliar y crear vivienda; desarrollar infraestructura carretera y reactivar la ferrocarrilera; generar políticas de impulso agropecuario para la soberanía alimentaria; desarrollar programas especiales a favor de ciudades fronterizas. En materia ambiental propone la siembra anual de un millón de árboles. Igualmente, plantea mantener la autonomía del Banco México, pero incluyéndole el objetivo de promoción del crecimiento eco-

nómico, así como el manejo moderado de la deuda y el déficit fiscal. En política social establece diversas propuestas para grupos específicos, tales como personas de la tercera edad, discapacitados, mujeres, niños, estudiantes e indígenas.

Este ambicioso programa parece estar constituido de objetivos loables en la mayor parte de los casos. Sin embargo, no se establece una estrategia que considere el entorno de la vorágine financiera internacional para poder desarrollarlo. La cuestión es cómo aplicar y financiar las acciones propuestas en un contexto incierto y adverso.

2.4 Las implicaciones de los juegos de poder económico

Las diversas propuestas implican, necesariamente, una elección de preferencias sobre ciertos actores en detrimento de otros. Es lógico suponer que los actores que resulten beneficiados por ciertas iniciativas tiendan a favorecer a quienes las proponen y, por el contrario, se trate de afectar a quienes enarbolen propuestas contrarias a sus intereses. La cuestión es, entonces, el nivel de influencia social que puedan tener unos y otros actores. A mayor poder económico, político y mediático se tendrá mayor influencia, al igual que en 2006, para favorecer a una determinada postura. Sin embargo, también ese mismo poder será el más reticente frente a la posibilidad de establecer una estrategia de desarrollo que sea capaz de reconstituir el mercado interno y el tejido social, pues las prioridades actuales se encuentran enfocadas en los beneficios que han tenido los grandes corporativos en las últimas décadas.

3. Escenarios poselectorales

Sea cual sea el resultado electoral de julio, la expectativa económica de México es la de una cierta calma y crecimiento económico hasta ese mes

y un deterioro posterior. Las expectativas de los especialistas consultados por el Banco de México marcan una tasa anual de crecimiento del PIB de 4.4% al mes de junio, misma que disminuiría a 4.09 en julio, a 3.57 en agosto y a 3.2% en diciembre. Evidentemente, este deterioro se acompañaría de una menor generación de inversión, empleo y demanda interna, lo que a su vez concordaría con el deterioro en las expectativas internacionales para el conjunto del año.

De triunfar una opción política que reproduzca las inercias actuales, las afectaciones de corto plazo serían paliadas por el mantenimiento o el reforzamiento de ventajas a favor de las principales empresas, sectores y regiones que actualmente guían la trayectoria económica del país. Sin embargo, esa relativa calma en el corto plazo no ofrecería la posibilidad de generar una estrategia que permitiese reducir la vulnerabilidad socioeconómica en el incierto entorno internacional de mediano y largo plazos.

Por el contrario, una estrategia alternativa podría generar expectativas de mayor confrontación económico-política en el corto plazo, pero podría sentar las bases para un crecimiento social y ambientalmente sustentable.

La posibilidad de que se genere un cambio significativo por las solas elecciones es lejana. Sin embargo, el crecimiento de las capacidades ciudadanas de incidencia política y social es fundamental para lograr tal posibilidad, dentro o fuera de los periodos electorales. Más allá de quién sea el próximo presidente, lo fundamental es que se generen las condiciones que permitan reorientar las regulaciones y las políticas públicas. Ninguna sociedad está condenada al fracaso, pero el obtener resultados distintos a los actuales pasa por hacer políticas diferentes a las que ahora se aplican. Es posible un futuro distinto al que nos ofrece la inercia actual, pero no se puede esperar algo diferente haciendo lo mismo que llevamos haciendo en las últimas tres décadas.